

## AAEF

### COMISIÓN DE TRIBUTOS LOCALES

#### TEMARIO

#### REUNION – OCTUBRE/2024

1. **Comisión Federal de Impuestos. Resolución 259/2024.** Ampliación del Hecho Imponible del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, según los términos del último Consenso Fiscal (2021) – Lucrativo (o no). Conculcación (o no) con la Ley de Coparticipación Federal de Impuestos. Comentarios de los participantes.
2. **Corte Suprema de Justicia de la Nación. “Transporte El Águila de Junín S.R.L. c/ Provincia de Buenos Aires s/Acción Declarativa (24/09/2024)”.** Impuesto sobre los Ingresos Brutos. **Transporte Interjurisdiccional.** Se promueve una acción fin de obtener que se declare la inconstitucionalidad de la pretensión de la demandada de gravar con el IIBB la actividad de transporte interjurisdiccional de pasajeros y afines. Considera que la pretensión fiscal de la demandada resulta violatoria de los arts. 17, 31 y 67 inc. 12 de la Constitución Nacional y del Régimen de Coparticipación Federal estatuido por la Ley 20.221 y modificatorias. Se aclara que el Ministerio de Transporte de la Nación, el 26/10/2017, le otorgó la concesión para realizar transporte de larga distancia. La **acción** que se intenta tiene su origen en el formal y explícito reclamo formulado mes a mes por la provincia demandada por medio del fisco local, a través de distintas intimaciones por diferentes periodos fiscales. Por otra parte, de acuerdo con “**Compañía Microómnibus La Colorada S.A.C.I.**” (y concordantes) el presente reclamo es de competencia originaria de la CSJN.

**A partir de lo expuesto la CSJN se declara competente en la presente causa.**

3. **Juzgado Federal de Campana. “Municipalidad de Pilar c/Ministerio de Economía de la Nación - Secretaría de Industria y Comercio s/Amparo Ley 16.986 (17/09/2024)”.** Prohibición (o no) de Incluir Tasas Municipales en las Facturas de Servicios Públicos. El 11/09/2024, se publica en el Boletín Oficial la **Resolución 267/2024**, de la **Secretaría de Industria y Comercio (Ministerio de Economía)**, por medio de la cual, su artículo 1, se establece que: “La información relacionada con los conceptos contenidos en los comprobantes emitidos por los proveedores de bienes y servicios en el marco de las relaciones de consumo, conforme las denomina el Artículo 3° de la Ley 24.240<sup>1</sup> y sus modificatorias, deberán referirse

---

<sup>1</sup> LEY DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR.

*en forma única y exclusiva al bien o servicio contratado específicamente por el consumidor y suministrado por el proveedor, no pudiendo contener sumas o conceptos ajenos a dicho bien o servicio, sin perjuicio de toda otra información de carácter general que corresponda incluir en el documento emitido, conforme a la norma aplicable".* Además, se establecen sanciones a las empresas que no cumplan con la presente normativa (posteriormente se emite más normativa concurrente).

Ante el dictado de esta resolución mencionada, el **Municipio de Pilar** promueve una acción de amparo contra el Ministerio de Economía de la Nación (Secretaría de Industria y Comercio), **solicitando la inconstitucionalidad de la R. 267/2024 por causar un gravamen irreparable a los derechos constitucionales del municipio.**

En primer lugar, sostiene el derecho manifiesto e incuestionable del Municipio de Pilar de percibir la **Tasa de Servicios Generales**, incorporando la misma a la boleta individual emitida por **EDENOR S.A.**, y la **Tasa por Vigilancia, Inspección y Desarrollo de Emprendimientos para la Provisión del Servicio Público de Gas por Redes**, incluyendo ésta en la boleta individual emitida **Naturgy BAN S.A.**

Expone, con relación al primer caso, que el mecanismo de incorporación a través de la boleta individual emitida por la prestadora a cada usuario eléctrico del Municipio de Pilar es autorizado expresamente mediante la **Ley (PBA) 10.740**, la que le impone la necesidad de firmar un convenio con la mencionada empresa. Ello, sin perjuicio de que, por aplicación del principio de **autonomía municipal**, podría designarse agente de retención sin necesidad de aval legislativo provincial y/o nacional. Igualmente, suscribió el convenio con Edenor S.A.

**Sostiene que la Resolución dictada por el PEN no ha medido las consecuencias y los derechos individuales que conculca, tales como el derecho a la vida, la salud, la integridad física, todos protegidos por la Carta Magna y los Tratados Internacionales que la integran, tales como la Declaración de Derechos Humanos.** Los mismos agravios plantea con respecto a la segunda Tasa.

Además, según el planteo del Municipio, con el dictado de la medida que se solicita se garantizaría **la capacidad recaudatoria de la comuna** y con ello la viabilidad del sistema de alumbrado público, el funcionamiento de los edificios públicos y el mantenimiento del sistema de vigilancia e inspección de las redes de gas del Partido de Pilar. En modo alguno produciría efectos jurídicos o materiales irreversibles para la Nación.

Posteriormente hace una breve reseña del principio de autonomía municipal y solicita el dictado de una **medida cautelar interina** hasta que la administración remita las actuaciones administrativas al juzgado.

A su turno, el **Juez Dr. Adrián González Charvay**, analiza la procedencia del recurso y expresa que: *“...en primer lugar cabe señalar que atento el carácter de la demandada (...) resulta de aplicación la Ley 26.854, y en este contexto, el artículo 4 de la misma establece que sólo cuando circunstancias graves y objetivamente impostergables lo justificaran, el juez o tribunal podrá dictar una medida interina, cuya eficacia se extenderá hasta el momento de presentación del informe o del vencimiento del plazo fijado para su producción; la cual debe reunir los requisitos de admisibilidad de toda medida cautelar, extremos que deben ser verificados (...) De la lectura de los argumentos expuestos por la parte actora se desprende que el fundamento que invoca tiene un grado de verosimilitud suficiente dentro de este primer análisis, consideración ésta que no implica adelantar opinión sobre la resolución final que deberá adoptarse en el presente caso en relación a la medida cautelar y a la cuestión de fondo...”*.

Luego, en menos de una semana, considera acreditado la verosimilitud del derecho y el peligro en la demora y concede la medida cautelar interina ordenándose la suspensión de los efectos de la Resolución 267/2024 dictada por la Secretaría de Comercio e Industria de la Nación. La medida interina tendrá vigencia hasta tanto se resuelva la medida cautelar solicitada en autos.

4. **Juzgado Federal de Rawson N°1. “Genneia S.A. C/ Municipalidad de Puerto Madryn s/acción mere declarativa de derecho (07/10/2024)”.** Tasa por Habilitación, Inspección, Seguridad e Higiene y Control Ambiental y Tasa por Habilitación Municipal. “Impuesto al Viento”. Parques Eólicos. El juzgado sostiene que la demandada no ha cumplimentado con la carga legal de acreditar la concreta, efectiva e individualizada prestación del servicio que la tasa retribuiría que según dice, retribuye: *“un servicio de inspección destinado a preservar y garantizar la seguridad y la salubridad”*. Agrega que: *“esto fue manifestado en diferentes causas entre las que se encuentran “Compañía Química SA c. Municipalidad de Tucumán” (CS, 03/09/1989) y más recientemente “Laboratorios Raffo c. Municipalidad de Córdoba” (CS, 26/06/2009) ...”*. De esta forma se concluye en la improcedencia del reclamo Municipal y se hace lugar a la acción declarativa.
5. **Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. “GCBA s/QUEJA POR RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD DENEGADO en CINEMATOGRAFICA SAC SA Y OTROS CONTRA GCBA SOBRE IMPUGNACION DE ACTOS ADMINISTRATIVOS (25/09/2024)”.** Impuesto sobre los Ingresos Brutos (2008 a 2013). Gravabilidad del Impuesto con Destino al Fondo de Fomento Cinematográfico. Gravabilidad de los Intereses Generados en el Exterior. Reintegro de Gastos. Queja Interpuesta por el GCBA.

El **TSJ** rechazó el recurso de queja interpuesto por el GCBA. Para así decidir, entendió que no todos los ingresos brutos resultaban alcanzados por el tributo en cuestión, sino solo aquellos que constitúan una retribución, una contraprestación, un pago, un precio, derivados del ejercicio de la actividad gravada. Que el tributo creado a los efectos del desarrollo cinematográfico era una obligación de terceros, y el dinero pagado por el espectador por ese concepto no era un ingreso para la accionante por el ejercicio de su actividad. También consideró que los rendimientos producidos fuera del territorio argentino por un capital colocado en el exterior no encuadraban en la base imponible del ISIB al no configurar una retribución o contraprestación por el ejercicio de la actividad llevada a cabo en el ámbito de la Ciudad, de modo que no se verificaba el requisito de sustento territorial. Por último, consideró que la refacturación de los gastos no se consideraban ingresos gravados. **En consecuencia, se rechaza la queja interpuesta por el GCBA.**

6. **Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Santa Fe. “Comuna de Soldini C/ Neumáticos Goodyear S.R.L. - Apremios Fiscales Municipales/Comunales- S/ Queja por Denegación del Recurso de Inconstitucionalidad (27/08/2024)”.** Inhabilidad de Título. Tasa de Almacenamiento de Neumáticos Fuera de Uso. Falta de Publicidad de la Ordenanza Fiscal. Oportunamente la Cámara de Apelación de Circuito de la Ciudad de Rosario, rechazó los recursos de nulidad y apelación interpuestos por la accionante (la Comuna) y con ello, confirmó la sentencia de grado (10/11/2022) que, a su turno, **había hecho lugar a la excepción de inhabilidad de título interpuesta por la demandada (Neumáticos Goodyear S.R.L.),** rechazando la ejecución intentada por Soldini. La Comuna, dedujo un recurso de inconstitucionalidad en los términos del artículo 1, inciso 3) de la Ley 7055, bajo el planteo de que el título traído a ejecución cumplió con todas las formalidades de ley siendo el mismo hábil y suficiente, no habiéndose opuesto excepción alguna sobre la inhabilidad por su forma extrínseca. En relación a la falta de publicidad de la Ordenanza N°54/2020, se agravio de que la Cámara no hizo más que reiterar de manera dogmática lo expresado por el Juez de primera instancia. **Aduce que la legislación local no establece cuál es la forma en la que se realizarán las publicaciones de las ordenanza.** La Alzada denegó la concesión del recurso interpuesto por la Comuna y esta compare de manera directa (en queja) ante la Corte.

La CSJ sostiene que “...si bien es cierto que en los procesos de apremio, en principio, se halla vedada la discusión causal de la obligación, se observa verificada en la especie la concurrencia de uno de los supuestos en los que se ha considerado, en definitiva, que la cuestión propuesta sí es susceptible de ser analizada en este acotado marco sin afectar la esencia ejecutiva del proceso, como lo constituye, en el presente, la **ausencia de deuda exigible por falta de oportuna publicación de la ordenanza respectiva,** puesto que **la publicación, en tanto exigencia constitucional nacional y local, es un elemento esencial y preexistente que hace**

***a la habilidad del título que posteriormente emite el órgano ejecutivo con apoyo en una ordenanza y, por lo tanto, es canalizable a través de la excepción interpuesta por la accionada...***

Es más, la actora no ofreció ni produjo prueba alguna sobre la existencia de dicha publicación en la oportunidad procesal pertinente. Por eso, oportunamente la Cámara resaltó que: "*no estando vigente la ordenanza respectiva **por falta de publicidad oportuna**, no existe deuda exigible y, consecuentemente, **el título esgrimido por la actora es inhábil para promover la presente ejecución...***".

**En consecuencia, se resuelve rechazar la presente queja.**

- 7. Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Tucumán - SECRETARÍA JUDICIAL - CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. "DAMPAS S.A. C/ Provincia De Tucumán S/Nulidad / Revocación (20/09/2024)". Impuesto sobre los Ingresos Brutos (2018 y 2019). Recupero de Gastos. Inexistencia de Arbitrariedad.**

**Dictamen del Ministerio Público Fiscal (17/05/2024)**

Se interpone un recurso de casación en contra de la sentencia del 20/2/2024 de la **Cámara Contencioso Administrative (Sala II)**, por medio de la cual se hace lugar a la demanda articulada por DAMPAS S.A. y, en consecuencia, se resuelve declarar la nulidad de las actas de deuda y sus resoluciones confirmatorias emitidas D.G.R. (19/07/2019) y de la Resolución del **Tribunal Fiscal de Apelaciones de Tucumán** (1/09/2022). El recurso ha sido deducido en forma tempestiva y satisface las exigencias de rito.

La Sociedad entendió que la determinación de deuda incluye en la base de cálculo del gravamen a operaciones que consisten en meros **recuperos de gastos**, ítems que conforme el artículo 222, inc. 3), de la Ley N°5.121, se encuentran excluidos de la BI, del IIBB. DAMPAS S.A. **afirma haber adquirido agroquímicos por cuenta y orden de terceros**, habiendo documentado tales operaciones en las notas de débito objeto de determinación (Argenti Lemon S.A. y S.A. Santa Isabel).

El **Superior Gobierno** se agravia, con relación a la sentencia de Cámara, en cuanto a que la impugnación del perito de parte de la DGR no fue tomada en cuenta, dado que hay inconsistencias entre las toneladas adquiridas a Bunge Argentina S.A. y las liquidadas a los mandatarios. En consecuencia, entiende la Provincia, dichas diferencias de cantidad y de importes, son elementos indicativos de que en realidad estas operaciones constituyen ventas de agroquímicos, encontrándose solapadas mediante la emisión de notas de débito para intentar configurar un recupero de gastos efectuado por cuenta y orden de terceros. Ante este estado de situación el

**Estado plantea que la interpretación realizada por el Tribunal es arbitraria y vulnera el ordenamiento jurídico vigente.**

Por su parte, la Sociedad probó que el precio del fertilizante por tonelada es el mismo en las notas de débito aludidas (compras por cuenta y orden), como en las facturas emitidas por el proveedor (Bunge), lo cual da cuenta de que no hay ganancia o beneficio para la demandante en la operatoria que se describe **y confirma que se trata de ingresos relacionados a un recupero de gastos**, no con una compraventa solapada, como afirma la DGR.

Es a partir de esto y de la prueba pericial contable presentada que el *a quo* falla a favor de la DAMPA S.A. El Tribunal (y luego también la CST) expresan que: ***“...para que la posición asumida por la demandada Provincia de Tucumán de considerar a la operatoria ajustada como operaciones de compra y venta tuviera acogida favorable, era menester aportar al expediente pruebas de similar o mayor rigor técnico o científico que desmerezcan las conclusiones alcanzadas en los peritajes, o que contradigan aquello señalado en los informes emitidos en el marco de las pruebas de la actora...”***.

En consecuencia, a partir de los antecedentes mencionados, el Ministerio Público Fiscal concluye que los agravios formulados no acreditan yerro ni arbitrariedad en el pronunciamiento en cuanto determina que las deudas especificadas en las actas incluyen en la base de cálculo del gravamen recupero de gastos, lo cual debió excluirse, limitándose la recurrente, como se anticipó, a proponer el reexamen de cuestiones de hecho y prueba, **materia propia de los jueces de la causa y ajena, en principio, al ámbito del recurso intentado**. Por lo tanto, el recurso de Casación deducido contra la sentencia de Cámara es Improcedente.

#### **Sentencia de la Corte Suprema de Tucumán**

En primer término, la Vocal, **Dra. Eleonora Rodríguez Campos**, remite al Dictamen del Ministerio Público Fiscal y agrega que: *“...A diferencia de las Cámaras que entienden en las apelaciones ordinarias, en la casación la Corte debe limitarse a examinar la juridicidad del juicio ponderativo de la plataforma fáctica obrante en el caso llevado a cabo por el a quo antes que dicha plataforma, cuyo juzgamiento compete de manera exclusiva y excluyente a los jueces de grado, sin que por esta vía extraordinaria pueda procurarse válidamente un reexamen crítico de los medios probatorios que dan base al pronunciamiento impugnado cuando no media una desproporción grave, manifiesta o grosera que convierta a la sentencia respectiva en arbitraria...”*. Tal situación no aconteció en el presente caso. Ergo, debe rechazarse por improcedente el recurso de casación. Por su parte, los vocales **Sbdar** y **Leiva** adhieren el voto de Campos, no haciendo lugar al recurso.

8. Tribunal Fiscal de Apelación de la Provincia de Buenos Aires. “**PDV MERCHANDISING S.A. (18/09/2024)**”. Impuesto sobre los Ingresos Brutos. Criterio de Atribución de Ingresos y Gastos. Sanciones. Responsabilidad Solidaria.

**Análisis:**

El período objeto de reclamo es el año 2009 (enero/diciembre) y el vocal instructor es el Dr. Ángel Carlos Carballal.

En primer lugar se ocupa del planteo prescriptivo. Se allana a la aplicación, más allá de resultarle (aún) refractaria<sup>2</sup>, de la jurisprudencia: “*Filcrosa (CSJN)*”, “*Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/ Recuperación de Créditos SRL. Apremio. Recurso de Inaplicabilidad de Ley (SCBA)*”, “*Volkswagen de Ahorro para Fines Determinados S.A. c/ Provincia de Misiones - Dirección General de Rentas y otro s/ demanda contenciosa administrativa (CSJN)*”.

Luego descarta la aplicación de “*Fisco de la Provincia C/ Ullate Alicia Inés - Ejecutivo- Apelación- Recurso Directo (CSJN)*”, desconociendo la existencia del antecedente: “*Fisco de la Provincia de Buenos aires c/ Matadero y Frigorífico El Mercedino S.A. y otros s/ Apremio. Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de Ley (15/05/2023)*”, de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires. Cabe destaca que último antecedente (y muchos otros de tribunales inferiores en el mismo sentido) no ha sido aplicado por el TFAPBA y tendría un efecto copernicano en la metodología de cálculo de la prescripción elegida por el tribunal administrativo con potestades jurisdiccionales. En consecuencia ratifica la anualidad del tributo.

Por otra parte, como el 29 de agosto de 2014, se notificaron los ajustes, según el Vocal Instructor, se perfecciona la constitución en mora (suspensión del curso de la prescripción por un año, por única vez, según el Código Civil), basándose en el fallo “*Banco de la Nación Argentina c/ GCBA –AGIP DGR— resol. 389/09 y otros s/ proceso de conocimiento (CSJN)*”.

A partir de lo expuesto en los párrafos anteriores computa la prescripción de la siguiente forma: “...transcurridos poco más de cuatro años y casi dos meses de prescripción, en el mes de agosto 2014 se suspende hasta el mes de agosto de 2015, retomando el cómputo pertinente, **el que hubiese vencido el 30 de junio de 2016**. Sin embargo, previo a ello y en término útil, se produjo la notificación de la Disposición Delegada N°5712 (13/11/2015), que contiene la intimación de pago del tributo determinado, diligencia efectuada el día 29 de diciembre de 2015 y la posterior presentación del recurso bajo tratamiento, opuesto en fecha 18 de enero de 2016.

---

<sup>2</sup> Cláusula de los Códigos.



Llegados a este punto, cabe destacar que: siguiendo la jurisprudencia de **Matadero y Frigorífico El Mercedino S.A.** como la diligencia de la intimación al pago se produjo con posterioridad a que operó la prescripción de todos los anticipos del ejercicio fiscal 2009 (la última operó el 12/2014), la misma no tiene efecto alguno en el curso de la prescripción, puesto que las potestades de la Administración para exigir el pago por las presuntas diferencias de todos los anticipos objeto de reclamo ya hubieran estados prescriptas. Es por eso, la relevancia de **El Mercedino** y la familia de fallos similares de los tribunales inferiores de la Justicia de la Provincia de Buenos Aires.

Luego, Carballal aplica la dispensa de la prescripción prevista en el artículo 2550 nuevo Código Civil y Comercial Unificado<sup>3</sup> (Art 3980 CC), otorgándole al TFAPBA el lugar de un tribunal de la órbita del Poder Judicial. Se debe puntualizar que, dada la cantidad de años transcurridos, más allá de la interrupción del curso de la prescripción como consecuencia del diligenciamiento del pago, es muy probable que también hubiera operado la prescripción puesto que en **Matadero y Frigorífico El Mercedino S.A.** (y otros de tribunales inferiores), la SCBA rechaza la aplicación de la dispensa de la prescripción ante la apelación en un tribunal de carácter administrativo.

**En cuanto a la sanción, el Dr. Vocal Instructor, sí la declara prescripta, por no existir causales de suspensión de su curso, no aplicando Alpha Shipping S.A.**

**Despejado el tema de la prescripción, sobre el fondo, determinación del coeficiente de ingresos y gastos, no se tienen en cuenta los agravios del apelante puesto que ya había resuelto, en forma desfavorable para el contribuyente la Comisión Arbitral y Plenaria en las Resoluciones N°17/2018 y 6/2019.**

Por último, en materia de responsabilidad solidaria de los directores, se limita el alcance de la aplicación de la jurisprudencia “Toledo”, “Insaurrealde” y “Casón” (SCBA), al afirmar que los dos directores, uno por firmar las declaraciones juradas de la sociedad (Clave Fiscal) y el otro por firmar los Balances, acreditan la condición subjetiva a los fines de que se les extienda la responsabilidad.

A su turno, el **Contador Crespi**, en lo único que discrepa con respecto al Dr. Carballal, más allá que aplica distintos fundamentos, es en la extensión de la responsabilidad solidaria a los directores, la cual fulmina en virtud de aplicar de forma plena la jurisprudencia antes citada.

Por último, el **Conjuez Dr. Luis Alejandro Mennucci** adhiere al voto del Cr Rodolfo Dámaso Crespi.

---

<sup>3</sup> “El juez puede dispensar de la prescripción ya cumplida al titular de la acción, si dificultades de hecho o maniobras dolosas le obstaculizan temporalmente el ejercicio de la acción, y el titular hace valer sus derechos dentro de los seis meses siguientes a la cesación de los obstáculos...”



9. Tribunal Fiscal de Apelación de la Provincia de Buenos Aires. “**VERRACO S.A. (26/09/2024)**”. COT. Falta de Emisión. Inconvenientes de Conectividad. Naturaleza del Adquirente. Acreditación de Bienes de Uso para el Adquirente. El valor de la prueba.

El Acta de Comprobación se perfeccionó el **5/07/2019**. Se apela la Disposición Delegada N°74 (8/02/2021). Se trata de la provisión de muebles al Banco de la Provincia de Buenos Aires, asumiendo el comprador la responsabilidad del acarreo de los bienes. Oportunamente se exhibió a ARBA (en el punto de control) toda la documentación según los términos de la R.G. (AFIP) 1415 (el remito se aportó en el momento y la factura con posterioridad en el expediente). En el descargo se destaca que el transporte es propiedad una persona humana que contrató el apelante. Aclara que: “...*el lugar donde se encuentra el establecimiento de la firma recurrente no cuenta con un sistema de comunicaciones de calidad. De allí, concluye que la falta de emisión del COT respondió a la imposibilidad de obtenerlo debido a la falta de operatividad del acceso telefónico e internet el día del despacho...*”. Por otra parte, como eximentes de su conducta alega que: “...*el artículo 2 inc. 5 la D.N. 32/2006 contiene una eximente, no tenida en consideración por la verificación: **cuando el propietario de la mercadería transportada sea, entre otros, un organismo público descentralizado o autárquico.** De este modo, arguye que siendo que la propietaria de los bienes transportados el Banco Provincia de Buenos Aires (la entrega de la mercadería se despachó a su nombre y bajo responsabilidad del comprador-destinatario), no correspondía la emisión del COT. Por otra parte agrega que **los bienes transportados se constituyen en bienes de uso para la institución bancaria, de forma tal que tampoco sería necesaria la emisión del COT, en virtud del inc. 6 del art. 2 de la DN mencionada en el párrafo anterior...***”.

A su turno el Vocal Instructor, **Cdor. Crespi**, expresa que la Sociedad **no ha ofrecido prueba alguna para demostrar y fundar la imposibilidad o dificultad alegada en materia de conectividad en la fecha en que fue llevado adelante el procedimiento de control**. Por ello, frente a estas consideraciones es que corresponde rechazar la defensa intentada. Con relación al planteo de que el adquirente de la mercadería en tránsito era el Banco Provincia de Buenos Aires, y por lo tanto, no resultaba exigible la emisión del C.O.T., se advierte que la factura correspondiente fue emitida con fecha 6 de julio de 2019 agregada en la etapa de descargo-, por lo que, en la instancia en que se efectuó la verificación en cuestión, no se había llevada a cabo la tradición de los bienes. **Ergo, según el Vocal Instructor, la entidad bancaria no había asumido el rol de propietario de las mercancías.**

Por último, con relación a la acreditación de Bien de Uso para el adquirente, es indispensable que tal carácter haya sido debidamente consignado en los comprobantes, circunstancia que no se corrobora en el caso de marras.

Por todo lo expuesto, se ratifica la multa impuesta por ARBA. Recordemos que hoy está vigente la R. N. (ARBA) 31/2019 (BO 10/04/2019).

**10. Tribunal Fiscal de Apelación de la Provincia de Buenos Aires. “PAPA GINO S.R.L. (19/09/2024)”. Impuesto sobre los Ingresos Brutos. Responsabilidad Solidaria.** ARBA dicta la Disposición Delegada N°5928/2021 que declara la responsabilidad solidaria del **Sr. Héctor Fabián Fernández**, por el pago del IIBB omitido por la firma Sociedad, sus intereses y sanciones, determinados por Disposición Delegada N°5116/2018, **todo ello en cumplimiento de la Sentencia de esta Sala**. Contra dicho acto, el Sr. Héctor Fabián Fernández, por derecho propio, interpone nuevo recurso de apelación (artículo 115, inciso b), del Código Fiscal).

El presunto solidario expresa como agravios que: **a)** la deuda reclamada, se encuentra prescripta en virtud de que el instituto se rige por las normas del Código Civil, encontrándose vedada su regulación a la legislación local; **b)** reitera la improcedencia de la deuda por inmotivada, infundada, irrazonable y arbitraria **en tanto considera que un procedimiento de punto fijo llevado a cabo durante dos meses del año 2012 no pueden tomarse como base para calcular todo el año**; **c)** plantea la improcedencia de la sanción; **d)** como argumentos propios del presente recurso, en referencia a la responsabilidad solidaria endilgada, plantea su nulidad, al no haberse atribuido de manera correcta, es decir, de manera clara, concreta y definitiva al utilizar la locución “configurarían” (indica que lo expuesto cobra mayor relevancia al tratarse de la extensión de responsabilidad por un hecho ilícito de un tercero); **e)** **considera inviable la extensión de responsabilidad por el solo hecho de detentar un cargo en la sociedad**, sin que se expliquen las acciones concretas que lo harían merecedor de tal imputación; **f)** agrega que, en el período analizado, el sindicato no actuó como integrante del órgano de la administración.

A su turno el **Dr. Ángel Carlos Carballal**, más allá de tener en cuenta la triada “Toledo”, “Insaurrealde” y “Casón” (SCBA), sopesa que: “...una detenida lectura de las actuaciones me permite concluir que **no existen elementos suficientes para extender la responsabilidad cuestionada**. Cabe destacar que más allá de la efectividad del acta de asamblea en cuestión y el cargo societario asignado, **el sindicato responsable no aparece en ningún momento del procedimiento, esto es, en ninguna de las actas de comprobación realizadas, ni se menciona en ninguno de los puntos fijos efectuados en los distintos restaurantes de la cadena. Por el contrario, la única mención que se realiza del Sr. Fernández es aquella que se encuentra en el acta discutida<sup>4</sup>, sin constancia alguna del ejercicio del cargo en el período fiscalizado y mucho menos, un accionar vinculado a la cuestión tributaria de la**

---

<sup>4</sup> Acta discutida puesto que, en la cual lo designan como socio gerente de la firma, la misma no fue inscripta en la Dirección Provincial de Personas Jurídicas.

**empresa cuya administración se le endilga. Ni siquiera el R-200 al que hace alusión el Fisco se encuentra firmado por persona alguna...".** En consecuencia, resuelve que tal extremo configura en el caso la hipótesis habilitante para que este Tribunal ejerza la facultad que le confiere el artículo 12 del mismo Código Fiscal y por lo tanto, declara que no se puede extender la responsabilidad solidaria al apelante.

El Cdr. Crespi resuelve en el mismo sentido, pero aplicando *"Toledo"*, *"Insaurrealde"* y *"Casón"* (SCBA) *in totum*. Por último, el Dr. Pablo German Petraglia, vota en el mismo sentido y se deja sin efecto Disposición Delegada N°5928/2021.

#### **Comisión Arbitral y Plenaria – Comentario de Daniela Cistola:**

**11. Resolución (CP) 11/2024 (27/06/2024). "Botón de Pago SA c/Provincia de Santa Fe" (R.CA N°29/2023). Concepto de "Costo".** La Comisión Plenaria en primer término nos ilustra describiendo que un gasto no será computable cuando el mismo no represente, medianamente, la magnitud de la actividad desarrollada por el sujeto en las distintas jurisdicciones en que opera, o no permita medir adecuadamente la actividad económica del contribuyente en cada jurisdicción. En consecuencia, la interpretación de los gastos no computables expresamente mencionados y otros que no los fueren, debe realizarse con suma prudencia y limitarse exclusivamente a aquellos que en forma clara no permitan medir adecuadamente la actividad económica del contribuyente.

A partir de la exposición teórica del párrafo anterior, coincide con la **Provincia de Santa Fe, quien opina que los servicios facturados por Prisma Medios de Pago, que corresponden al desarrollo de un software (denominado como Start Up) imprescindible para que Botón de Pago SA pueda prestar sus servicios de procesamiento de pagos virtuales no implican una actividad propia de Botón de Pago SA, sino del tercero Prisma Medios de Pago** (costo no computable – a diferencia del tratamiento otorgado por la apelante). Se trata del desarrollo de un software que utilizará Botón de Pago SA para prestar sus servicios. En consecuencia, sostiene la CP, es claro en el caso que el desarrollo del sistema contratado por el contribuyente constituye el elemento esencial que permite brindar el servicio, por lo cual su desarrollo implica un costo sin el cual no podría brindarse el mismo.

**Asimismo, el contribuyente sostiene que la exclusión a la computabilidad contenida en el inc. b) del artículo 3° se limita a los costos de servicios siempre que estos se comercialicen en el mismo estado y sin el agregado de valor alguno. Cabe destacar que las condiciones que expone el contribuyente no surgen del texto legal del CM, más allá de que en el análisis de algún caso en particular dichas características se hayan tenido en cuenta para la exclusión de la aplicación de dicho inciso.** Sin embargo, en el caso particular,

las erogaciones realizadas para el desarrollo de un software esencial para la prestación del servicio claramente no proporcionan un parámetro válido para determinar la magnitud o cuantía de la actividad de la firma en una determinada jurisdicción; **consecuentemente, se está en presencia de un “gasto no computable” a los fines del armado del coeficiente respectivo.**

Por otra parte, en cuanto al tratamiento contable otorgado por la contribuyente como gasto o costo, que es acreditado con la pericial, corresponde señalar que el tratamiento contable puede servir de indicio pero no resulta un hecho determinante. **Es incorrecto utilizar únicamente los principios contables al momento de definir qué conceptos integran el costo de los bienes y cuales deben considerarse en el cuadro de gastos, ya que no existe una identidad entre el costo contable y el costo impositivo a los fines del Convenio Multilateral. El tratamiento contable es un indicio pero no es determinante a los fines de la aplicación del CM.**

Por lo tanto, se ratifica el criterio de la CA en que las erogaciones incurridas para el desarrollo del software, esencial para el servicio prestado por el contribuyente, son un costo de prestación del servicio que debe ser encuadrado dentro del inc. b) del art. 3º del Convenio Multilateral.

Además, con relación a las erogaciones para la adquisición de terminales **MPos** frente al CM, la CA entendió que eran también un costo.

Por último, con respecto del Protocolo Adicional, tampoco se hace lugar.

## **12. Adhesiones Provinciales al RIGI (27.742) y a la Ley 27.743 (Exteriorización de Bienes):**

JURISDICCIÓN	RIGI (LEY 27742)		RÉGIMEN DE REGULARIZACIÓN DE ACTIVOS (LEY 27743)					
	Adhesión	Normativa	Adhesión	Normativa	Libera pago impuestos provinciales	Libera penalidades y sanciones	Cobra Impuesto Especial	Exime retenciones cuentas CERA
CABA	❌		❌					
BUENOS AIRES	❌		❌					
CATAMARCA	✅	Ley N° 5863	❌					
CÓRDOBA	❌		✅	Ley N° 10980	✅	✅	❌	❌
CORRIENTES	✅	Ley N° 6694	✅	Ley N° 6696	✅	✅	❌	❌
CHACO	✅	Ley N° 4086	✅	Ley N° 4088				
CHUBUT	✅	Ley N° IX-171	✅	Ley N° XXIV-109	✅	✅	❌	✅
ENTRE RÍOS	❌		✅	Ley N° 11150	✅	✅	❌	❌
FORMOSA	❌		❌					
JUJUY	✅	Ley N° 6409	✅	Ley N° 6414	✅	✅	❌	✅
LA PAMPA	❌		❌					
LA RIOJA	❌		❌					
MENDOZA	✅	Ley N° 9567	✅	Ley N° 9575	✅	✅	❌	✅
MISIONES	❌		✅	Ley N° XXII-42	✅	✅	❌	❌
NEUQUÉN	❌		✅	Ley N° 3450	✅	✅	✅	✅
RÍO NEGRO	✅	Ley N° 5724	✅	Ley N° 5741	✅	✅	❌	❌
SALTA	✅	Ley N° 8151	❌					
SAN JUAN	✅	Ley N° 2671-I	❌					
SAN LUIS	❌		✅	Ley N° VIII-1134	✅	✅	❌	✅
SANTA CRUZ	❌		❌					
SANTA FE	❌		❌					
SANTIAGO DEL ESTERO	❌		❌					
TIERRA DEL FUEGO	❌		❌					
TUCUMÁN	❌		✅	Ley N° 9789	✅	✅	❌	❌
TOTAL ADHESIONES	9 37,50%		12 50,00%					

### 13. Novedades de Legislación. Comenta José Alaniz.

### 14. Las Acciones Declarativas en la Provincia de Buenos Aires. A continuación detallamos los fallos citados por la Dra. Mariana Mattarollo en la reunión de septiembre/2024:

1. SCBA, I. 79.221, “Sociedad Rural de Vedia c/ Municipalidad de Leandro N. Alem s/ inconstitucionalidad arts. 125, 126, 127 inc. 2, 133 de la ordenanza fiscal 2024”, resol. de 14-VI-2024. El presente se adjunta como material.

2. SCBA, I. 79.252, “Willgan S.A. c/ Municipalidad de Leandro N. Alem s/ inconstitucionalidad arts. 125, 126, 127, 133 de la ordenanza fiscal 2024”, resol. de 14-VI-2024.

3. SCBA, I. 79.261, “Ganwill S.A. c/ Municipalidad de Leandro N. Alem s/ inconstitucionalidad art. 133 de la ordenanza fiscal 2024”, resol. de 14-VI-2024.

4. SCBA, I. 79.218, “Altos de Ezeiza S.A. y otro c/ Municipalidad de Ezeiza s/ Inconstitucionalidad arts. 419-425 y ccs. Ordenanza Municipal n°4.628/23”, resol. de 14-VI-2024.

5. SCBA, I. 79.219, “*Club de Campo cinco Esquinas del Camino Real S.A. y otro c/ Municipalidad de Ezeiza s/ Inconstitucionalidad arts. 419-425 y ccs. Ordenanza Municipal n°4.628/23*”, resol. de 14-VI-2024.

6. SCBA, I. 79.199, “*Ocampo Martín María c/ Municipalidad de Azul s/ Inconstitucionalidad de arts. 159 a 161 de Ordenanza Municipal n°4.909/23*”, resol. de 14-VI-2024.